

ACTORES POLÍTICOS, EN LA ARENA POLÍTICA UN ESTUDIO COMPARADO ACERCA DEL GOLPE PARLAMENTARIO EN BRASIL Y PARAGUAY.

Victor Hugo Jara Cardozo

*Graduando em Ciência Política e Sociologia (UNILA)

Advertencia previa al lector.

El presente artículo fue escrito en el periodo intermedio entre la aprobación del juicio político a Dilma en la cámara de diputados, y su posterior juicio y destitución en el senado. Por ello, las afirmaciones sobre el momento histórico deben ser entendidas en ese marco. Mucho pensé en modificar el artículo original atendiendo a los últimos hechos políticos que se han dado en ambos países. Sin embargo, decidí dejarlo en estado original, para que de esta manera, el lector, ante los nuevos acontecimientos, someta las conclusiones propuestas por el autor.

Los últimos acontecimientos en ambos países son de enorme importancia, y marcarán, definitivamente el futuro de ambos. En el poco tiempo en que Temer ha estado en la primera magistratura de manera definitiva, muchos han sido los elementos necesarios de análisis. Actualmente, en los parlamentos de ambos países se encuentra en discusión proyectos de enmiendas a la constitución. En el caso de Brasil, el Proyecto de Enmienda Constitucional 241, conocido como “PEC 241”, fiel al estilo austero y neoliberal, pretende congelar los gastos públicos durante veinte años, marcando un techo de posibilidad de gasto, medido este de acuerdo a la cantidad gastada en el presente año (2016), esto sin mencionar que el parlamento brasileño ya aprobó una ley que progresivamente irá disminuyendo la autonomía nacional sobre los yacimientos petrolíferos a favor de las transnacionales, es decir, la progresiva privatización de uno de los recursos nacionales más valiosos. Por el lado paraguayo, además de la política económica de endeudamiento irresponsable, y de demás medidas que fomentan la precarización laboral y del nivel de vida de los sectores más vulnerables –que a su vez, directa e indirectamente es el motivo del aumento de violencia e inseguridad, que últimamente ha obtenido números muy elevados-, en estos momentos el senado se encuentra discutiendo un proyecto de enmienda que posibilitaría al presidente de la República la reelección por un periodo más. En el caso de que la propuesta se apruebe en el parlamento, deberá pasar por aprobación popular mediante un referéndum, de no darse la aprobación de dicha enmienda, se plantea la posibilidad de realizar una reforma

constituyente. Lo preocupante con respecto al caso paraguayo, para el autor, no es la discusión sobre la reelección, sino, el momento político, marcado por una radicalización del discurso del partido colorado, un partido tradicional y ultraconservador. En la última convención general del partido, el pasado sábado 29 de octubre, afloraron peligrosamente elementos de la pasada dictadura stronista en la petición casi unánime de la “coloradización” del ejecutivo, con la consecuente destitución de todos los ministros que no pertenezcan al partido del oficialismo. Este generó la posterior destitución de Francisco de Vargas, ministro del interior y la afiliación al partido colorado, -para así no ser destituido- del otro ministro no colorado, Santiago Peña, ministro de hacienda. Esta nueva postura, contradice totalmente el discurso con el que comenzara su gobierno. Pues, al comienzo de su mandato, con su heterogéneo gabinete, predicaba a diestra y siniestra un discurso tecnócrata: en donde solo los mejores ocuparían los cargos de importancia. Sin embargo, para conseguir el apoyo de su partido, en estos últimos tiempos, ha cedido ante lo más bajo de los discursos incoherentes y con bajo contenido de los “hurreros” demagogos. Ha sucumbido totalmente ante el resurgimiento de esta radicalización partidaria, cosa que tampoco parece molestarle mucho, pues este cambio drástico de discurso solo demuestra el total sometimiento de su discurso a la correlación de fuerzas. En sentido maquiavélico, su discurso simplemente es el reflejo de la clase con mayor influencia de turno -sin importar las consecuencias- en función de la posibilidad de obtener su objetivo: mantener el poder. Esa radicalización del discurso partidario, atenta totalmente a los sentimientos más democráticos, haciendo de la opción partidaria un elemento esencial para las posibilidades de acceder a cargos públicos, y en ese sentido, hace resurgir el fantasma de los sentimientos dictatoriales.

Es muy curioso que al anterior presidente colorado, que había precedido a Fernando Lugo, Nicanor Duarte Frutos, también en su momento había planteado la posibilidad de la reelección, propuesta que fue totalmente rechazada por su partido, profundamente escindido en ese entonces. No había logrado consagrar un apoyo mayoritario dentro de su partido. Que en este momento la propuesta de la reelección sea planteada tan vehementemente y con mucha posibilidad de aceptación, no es porque la reelección es, en sí, buena o mala, sino es el reflejo de un gran acompañamiento partidario. Es bien sabido que un factor determinante para conseguir esa “unidad” partidaria, no han sido sus “buenas cualidades de líder” o su administración, sino, su gran poder económico. Y una vez más, que el factor económico determine el destino del partido oficialista, demuestra la profundísima falencia del sistema

democrático, que históricamente se ha olvidado de cumplir su mandato supremo: el de representar los intereses de la mayoría.

Lo más preocupante es, que en el contexto de la profunda dominación colorada, si se da la constituyente, se pueden profundizar las reformas neoliberales, que ya vienen dándose a lo largo de su gobierno, generando daños difíciles de reparar a la institucionalidad estatal. Todos estos acontecimientos son de delicada importancia, y deben de ser discutidos con mayor atención y espacio.

Este brevísimo repaso de los hechos más destacados desde la realización del artículo hasta el presente, pretende dar mejores herramientas de crítica y análisis al lector, para que de esta manera, juzgue la validez, o no, de las conclusiones que el autor había planteado.

Resumen.

Ante el “fenómeno” de la caída de los partidos “progresistas” y la utilización de golpes parlamentarios (por lo menos en tres casos en América Latina), pretendo encontrar algunos de los factores que hicieron posible este fenómeno. Mediante el estudio comparado de dos países: Brasil y Paraguay, analizaré el accionar de actores políticos que generaron desestabilidad en el gobierno de estos dos países. Trataré de develar los posibles factores que llevaron a esta “decadencia” de los partidos “progresistas” que se encontraban en el gobierno. Usando el caso brasileño y paraguayo, propongo posibles variables que puedan explicar la decadencia de la propuesta “progresista”. Ambos ejemplos marcados por una coalición liderada por una figura de izquierda, con minoría parlamentaria, y, en alianza con partidos moderados, sufrieron una crisis de gobernabilidad, que en ambos casos llevó a la destitución del presidente democráticamente electo, mediante un tergiversado mecanismo constitucional: el juicio político

Para el caso paraguayo, será tomado el gobierno de Fernando Lugo, y del brasileño, el de Dilma Rousseff, con algunas menciones a cerca de cómo llegaron al poder y cómo se dio este “proceso de desgaste”. La hipótesis es que la presencia de actores políticos disidentes al gobierno, dentro y fuera de la estructura estatal, impiden la realización de proyectos políticos del gobierno, generando una crisis de gobernabilidad. A lo largo del gobierno de Dilma y Lugo, existieron actores políticos con poder, que vieron, en cierta medida, dañado sus intereses por las posturas de los gobiernos, generando inestabilidad política, con el objetivo de desvirtuar al gobierno, quitarlo del “juego” y así, resguardar sus intereses.

Palabras claves: actores políticos, coaliciones heterogéneas, gobernabilidad, golpe parlamentario.

Actores políticos, en la arena política

Para mediados del segundo decenio del siglo XXI, América Latina vive un episodio muy particular. Aquella oleada de gobiernos “progresistas”, que con mucho éxito comenzara a ganar fuerza en el campo político a inicios del 2000, hoy parece sufrir un importante retroceso.

Los grupos políticos caracterizados como de “izquierda” durante el siglo pasado, estuvieron, generalmente, organizados en torno a objetivos políticos más “revolucionarios” y contestatarios del sistema estatal, con proyectos políticos claramente incompatibles con el statu quo. Lo que definía, generalmente, a estos movimientos, o grupos, era su discurso ideológico contundente, y no objetivos electoralistas, como bien lo define Pereira da Silva, en su libro, *“Vitórias na Crisi”*. Esta disputa política se daba en torno a la crisis de las “reglas de juego”, puesto que estos grupos intentaban hacerse del poder, a través de otros medios. La efervescencia de la revolución cubana en el sentimiento de la época, habría generado un importante impulso a tales objetivos y métodos. Sin embargo, conviene aclarar que este “fenómeno” no se da tan claramente de esa manera en todos los lugares, y el caso chileno es fiel ejemplo de lo contrario. Impulsados por las resoluciones del XX Congreso del partido comunista de la Unión Soviética (PCUS) de 1956, que reconocía las *“vías nacionales al socialismo... los comunistas chilenos se habían convertido en los principales estrategas de un proyecto revolucionario a través de las instituciones...”* (Santoni 2011, p. 22). Una década y media después, en Chile se estaba dando la única experiencia socialista por la vía democrática. Más tarde, a inicios de nuestro siglo, el discurso de los grupos de izquierda se fue moderando, aceptando, paulatinamente y cada vez más, objetivos electoralistas, y una ambigüedad ideológica, dispuestos a coexistir en el gobierno con actores que, en otro momento, sería una “herejía” contemplarlos en un plan de gobierno. En ese sentido, luego de la gran crisis neoliberal por la que pasan la mayoría de los países de América Latina, comienzan a surgir partidos políticos de “izquierda”, con este nuevo componente electoralista, ambigüedad discursiva, y con miras claras a obtener el gobierno a través de las “reglas de juego” –a saber, el proceso democrático-. Estos partidos también son denominados de “neo-desarrollistas” (Boschi y Gaitan, 2015), (Singer, 2015) por proponer un proyecto político, económico y social con fuerte participación estatal, una suerte de “regreso”

al estado keynesiano, o rooseveltiano (Singer, 2015). Giddens (1999, p. 51)¹ hace énfasis a la intervención estatal como característica de las izquierdas: “*Las izquierdas no solamente buscan justicia social, sino también creen que el gobierno debe desempeñar un papel-llave en la promoción de esa meta.*”

En ese sentido, en América Latina surgen varios gobiernos, que por las características mencionadas arriba, son denominados como de izquierda. Esta “oleada” de gobiernos, que surge luego de la crisis neoliberal, a comienzos de la década del 2000, comienza a sufrir una crisis importante de legitimidad a mediados de la segunda década del presente siglo.

Últimamente se ha generado una intensa producción académica ² en torno a este “nuevo fenómeno” que aún no tiene características conceptuales muy claras, y que está en proceso de asimilación.

Palau (2007) afirma que, esta cadena de gobiernos de izquierda que surge en América Latina, no fue necesariamente fruto de una “moda” ni de una tendencia inexpugnable, sino, más bien, fruto las necesidades compartidas. El reciente pasado neoliberal había sometido de manera dura a los países de la región, generando niveles de pobreza nunca antes alcanzados.

El presente trabajo trata de develar los posibles factores que llevaron a esta “decadencia” en dos ejemplos particulares. Usando el caso brasileño y paraguayo, se pretende encontrar las posibles variables que puedan explicar la decadencia de la propuesta “progresista”. Ambos ejemplos marcados por una coalición liderada por una figura de izquierda, con minoría parlamentaria, y, en alianza con partidos moderados, sufrieron una crisis de gobernabilidad, que en el caso paraguayo llevó a la destitución del presidente democráticamente electo: Fernando Lugo, mediante un tergiversado mecanismo constitucional: el juicio político. Procedimiento calcado se está dando actualmente en el Brasil, en donde la presidenta, ante una grave crisis de gobernabilidad, está siendo “procesada” políticamente, mediante la misma figura de juicio político. La similitud del procedimiento popularizó la frase “*golpe a la paraguaia*” en vista al método utilizado, y encabezado, al menos públicamente, por la coalición que integraba la fórmula presidencial³.

1 Citado por (Pereria da Silva, 2011, p. 53).

2 (Boschi y Gaitan, 2015); (Singer, 2015); (Santana, 2016); (Palau, Marielle, 2010); (BASE Investigaciones Sociales, 2011); entre otros.

3 Es importante hacer la aclaración, para evitar confusiones, de que, en este trabajo, se intenta hurgar sobre motivos de tal acontecimiento, más allá de aquellos propuestos por el libelo acusador de las respectivas cámaras bajas, en la que sustentaron el juicio. A partir de lo investigado, se propone elementos que pueden ayudar, o no, a dilucidar otros factores que hayan impulsado tal juicio.

Para el caso paraguayo, será tomado el gobierno de Fernando Lugo, y del brasileño, el de Dilma Rousseff, con algunas menciones a cerca de cómo llegaron al poder y cómo se dio este “proceso de desgaste”. La hipótesis es que la presencia de actores políticos disidentes al gobierno, dentro y fuera de la estructura estatal, impiden la realización de proyectos políticos del gobierno, generando una crisis de gobernabilidad. A lo largo del gobierno de Dilma y Lugo, existieron actores políticos con poder ⁴, que vieron, en cierta medida, dañado sus intereses por las posturas de los gobiernos, generando inestabilidad política, con el objetivo de desvirtuar al gobierno, quitarlo del “juego” y así, resguardar sus intereses. Los casos tomados, son similares en el procedimiento último –la opción por el juicio político– pero muy diferente en cuanto al proceso en que estos actores políticos intervinieron en la escena, y en la manera en cómo procedieron a la tarea de desestabilización estatal. La estructura económica de ambos, los distancia, en cierta medida, y en función de esa distancia, los “actores desestabilizadores” son distintitos, mas, con una dinámica de acción similar.

Con respecto a los actores políticos, dentro y fuera del gobierno, Palau (2007) nos da una distinción esclarecedora. El autor, reconoce una diferencia esencial entre gobierno y poder. Gobierno sería la instancia institucional reconocida, aquella que vemos en los rostros de las propagandas electorales, es decir, la administración tanto ejecutiva, legislativa como judicial del país. Poder, tendrían aquellos que participan directa o indirectamente en la formación de políticas de gobierno, que tienen capacidad de dirección de las mismas (Boschi y Gaitan, 2015) y, esencialmente, capacidad de veto. Estos últimos, como afirma Palau, generalmente son confundidos con los primeros, sin embargo, los del gobierno, no son los únicos actores políticos detentores de poder con capacidad de incidir en la formación de políticas públicas y de veto de las mismas. Para el caso paraguayo, señala que existen cuatro pilares, o actores, políticos principales detentores de poder: La oligarquía ganadera, el empresariado corrupto, los narcos y las corporaciones transnacionales. A estos últimos actores, Palau los denomina como detentores del “*poder real*”, y que cualquier gobierno en Paraguay, que pretenda gobernabilidad,

“...debe ser respetuoso de los intereses de los que tienen el poder real. Más que respetuosos tienen que ser funcionales a los mecanismos instalados de acumulación de riqueza. De no ser así, son eliminados...”

4 Los conceptos presentados de manera ambigua, se irán aclarando en el desarrollo del trabajo.

(PALAU 2007, p. 350)

Los actores políticos con *poder real*, fuera del andamiaje estatal suelen tener la denominación de “elites”, Boschi y Gaitan, nos brindan una definición más clara con respecto a las características de las misas, y la medida de poder con la que cuentan.

A literatura tende a entender as elites estratégicas como o grupo social que ocupa posições privilegiadas em diferentes campos (econômico, político, intelectual, do mundo do trabalho), tornando-as fundamentais nas dinâmicas de desenvolvimento em suas mais diversas formas. Em primeiro lugar, as elites ocupam uma posição-chave no processo de produção de políticas públicas. Por outro lado, elas têm uma posição privilegiada na formação e redefinição das instituições políticas e de governo. (Boschi y Gaitan, 2015, p. 10)

Una vez demostrada la existencia de actores políticos, internos y externos al engranaje institucional del estado, con poder de incidir en la formación de políticas de gobierno y de veto sobre las mismas, se abre paso para comprender una consecuencia lógica de tal premisa, que permite comprender la dinámica del funcionamiento estatal: Que los niveles de gobernabilidad de los gobiernos, dependen de la medida en cómo se relacionen con estos actores políticos, de que si los intereses del gobierno se encuentran alineados o no a esos intereses. Y que si se encuentran en oposición, deberán realizar coaliciones con otros actores para poder sostener la estructura gubernamental.

La influencia que tienen los actores estratégicos en el desenvolvimiento del plan de gobierno, determina radicalmente la efectividad del plan. La coalición que se da, determina qué intereses de qué clase son los más beneficiados, dependiendo de la correlación de fuerza, algunas veces serán a favor de uno, a veces a favor de otro. Lula, al comienzo se gobierno, supo sortear las dificultades de los intereses opuestos al discurso que planteaba – los intereses de la burguesía- porque no atacó radicalmente los intereses de estos. Sino, supo mantener un diálogo. Una vez que Dilma intentó medidas más radicales, el sector tocado –en este caso particular, el sector rentista- reaccionó, generando una crisis de gobernabilidad.

Según mencionan Boschi y Gaitan, existe una parte de la literatura que sostiene que los niveles de desarrollo, se dan en la medida de la capacidad del estado generar buenas coaliciones con los demás actores políticos.

La buena relación con las elites, genera buenos niveles de gobernabilidad y prosperidad. Como lo demostraron los dos periodos de Lula, quien mantuvo buena relación con la burguesía, sin atacar sus intereses y niveles de lucro. Es indispensable, no obstante, para no caer en errores de relación con las variables, contemplar otras variables, al menos ponerlas de relieve, para que luego sean objeto de estudio. Porque bien puede ser que no sean las buenas coaliciones entre las elites y los gobiernos los que generen prosperidad. Si contemplamos factores económicos externos, las conclusiones podrían ser diferentes. A comienzos de la década del 2000, luego de la crisis causada por el neoliberalismo en América Latina, se generó un aumento sustancial del valor las comoditis, principal fuente de ingreso de los países latinoamericanos. La buena diferencia obtenida por Brasil, por el aumento de valor de las exportaciones primarias, pudieron haber generado las buenas relaciones entre las elites y el gobierno. Sin embargo, para el caso paraguayo, esta “ley” no se aplica, pues, en el año 2011, el Paraguay alcanzó uno de los niveles de crecimiento, a un año, más altos del mundo: más del 14%, esto, no consiguió limar las grandes diferencias que existían entre el gobierno y el poder. El objetivo de este trabajo es intentar demostrar el peso que tienen estas elites en los niveles de gobernabilidad, que cuando se atacan directamente sus intereses, estos reaccionan, desestabilizando al gobierno de turno, no por ello trataré de ocultar otras variables que ayuden identificar el verdadero problema. Pablo Iglesias (2015) afirma que “...*los periodos de estabilidad política generalmente, se encuentran, asociados a la estabilidad económica...*”

En el trabajo de entender la realidad, las tendencias del investigador al momento de tomar decisiones sobre cual variable tomar para explicar los fenómenos, determinan el curso de la investigación, es esencial entender ello para comprender la dinámica de la producción académica. En este trabajo, he tomado las variables demostradas para proponer temas para el debate y, de ninguna manera, determinar proposiciones concluyentes.

Un partido, para conseguir la mayoría electoral necesaria para llegar a puestos de poder, necesita contemplar en su base ideológica y discursiva, a una gran parte de los segmentos y clases de la sociedad. Las medidas que tome, no deben dañar, al menos bruscamente, los intereses de uno y otro, sino que, deben responder a intereses que sean

comunes a ambas (Adam Przeworski 1985)⁵. Lula hizo campaña en dos frentes, justamente haciendo eso: mejorando la condición laboral del trabajador, que posibilitó su ingreso a la cadena de consumo, y que a su vez, generó un gran aumento de la clase media, y por otro, los intereses del mercado financiero se vieron muy beneficiados por las políticas gubernamentales, que dejaban a los bancos actuar en márgenes de intereses muy elevados (Santana 2016, p. 3).

Los intereses de las clases antagónicas son totalmente opuestos e irreconciliables, por ende no se pueden llevar al extremo los reclamos esenciales de las clases al mismo tiempo, esto generaría el quiebre con uno de los frentes. Lula mantuvo esta cierta ambivalencia política-económica, que, a priori, podríamos decir fue uno de los fundamentos que hizo posible su gobernabilidad. El punto de encuentro de las políticas que intentan responder a los reclamos de las clases altas y bajas, es la clase media. Es ese el principal sector de acción del PT.

Haciendo referencia al caso paraguayo, Lugo mantuvo una posición política ecléctica similar, sin embargo sufrió enormemente de bajísimos niveles de gobernabilidad, lo que, a diferencia de Lula, no le dejó realizar casi nada de su proyecto de gobierno. Dilma, conociendo del gran peso y poder de veto que suele tener la elite económica, buscó aliarse con una parte de ella para poder realizar cambios más estructurales. Se alió con el sector empresarial, en contra del sector financiero-rentista, esperando, de esta manera, conseguir el sustento necesario para continuar con el proceso de cambio, con un enfoque más claro a los intereses de las clases históricamente excluidas. En ese sentido, mediante medidas económicas, hizo con que la tasa de interés del crédito, descendiera bruscamente, tocando sensiblemente los intereses de los bancos, quienes inmediatamente reaccionaron. La tasa de interés del crédito bajo, posibilita un más fácil acceso a capital, que, a su vez, apoya al crecimiento industrial. Sin embargo, la burguesía, que se compone de varios sectores, actúa siempre visando los intereses individuales de sector, se hace de mecanismos para recomponerse. Las medidas que había tomado Dilma, ya a comienzos de su mandato, beneficiaban claramente al sector industrial, esto, sin mencionar que muchas de estas medidas fueron sugerencia misma de ese sector. El sector financiero, viéndose lastimado, se recompuso, consiguiendo que el sector industrial lo apoyara, debilitando duramente al

5 Citado por Santana (2016, p. 3)

gobierno de Dilma, generando, de esta manera, una crisis de gobernabilidad.

Las coaliciones se presentaban, según Singer, de la siguiente manera:

“A coalizão rentista unificaria o capital financeiro e a classe média tradicional, enquanto a produtivista seria composta dos empresários industriais associados à fração organizada da classe trabalhadora. Pairando sobre ambas, com o suporte do subproletariado, os governos lulistas fariam uma constante arbitragem de acordo com a correlação de forças, ora dando ganho de causa a uma, ora à concorrente.” (Singer, 2015, p. 58).

En la década del 90, la coalición que concentró el poder, fue el del gobierno con los sectores rentistas-financieritas. El programa rentista genera más altos índices de dependencia económica del centro, generando el fortalecimiento del capital financiero, reprimarizando la economía y desindustrializándola. El ensayo desarrollista, impulsando la industrialización, genera un desarrollo importante del sector manufacturero, generando más altos índices de independencia económica. Lula, coqueteaba con uno y otro, de acuerdo a la correlación de fuerzas de la coyuntura.

En cuestiones macroeconómicas el gobierno de Lula significó casi una continuidad con el gobierno anterior de FHC. La diferencia de su gobierno, radicó, sustancialmente, en la promoción de varias leyes y políticas públicas orientadas al mejoramiento de la condición de vida del trabajador; la creación de nuevos puestos de trabajo; el aumento del salario mínimo; todo esto generó una disminución importante de la pobreza. Esto, aliado a la coalición financiera-rentista del neoliberalismo, en detrimento del sector industrial. En la cuestión económica, no fue sólo una continuidad, sino que, se registró incluso un aumento de los beneficios del capital financiero. Tanto, que los bancos, durante el mandato de Lula, pasaron a ganar ochocientos por ciento más que en el gobierno neoliberal anterior. Las ganancias de los bancos de R\$ 34,4% billones, en el gobierno de FHC, aumentaron a R\$ 279,9 billones, en el gobierno de Lula (Boschi y Gaitan, 2015, p. 26).

Además de la dicotomía rentista-productivista, se plantea otra configuración dicotómica: la de los intereses nacionales contra la de los extranjeros. En ese sentido, por un lado, aun manteniendo ciertos conflictos, se encontrarían del mismo lado el sector industrial

nacional con el financiero nacional contra las empresas rentistas y productivas extranjeras. Estas menciones son importantes para la discusión, en la medida que sirven como indicadores para testar las propuestas conceptuales. Pues, si la dicotomía rentista-productivista, que había sido característico del periodo lulista, poco después del comienzo de la “era Dilma” estos sectores, anteriormente en cierta oposición, pasan a formar parte del mismo bloque, nuestra categorías de configuración dicotómica, sufre cambios estratégicos.

Un intento por generar desarrollo.

La propuesta de Dilma era el de generar un desarrollo de la industria nacional, a partir de la intervención estatal, en alianza con los sectores empresariales-productivos y los sectores obreros. Es decir, la búsqueda de la superación del subdesarrollo a través de una industrialización integral dirigida y planificada por el estado. El proceso de gradual transformación, se había iniciado a finales de la era Lula, y se había afianzado en el inicio de la era Dilma. La nueva matriz propuesta consistía en una fuerte intervención estatal de protección y estímulo de la producción nacional, reducción de impuestos, de intereses, de la electricidad –aliviando considerablemente el costo de producción-, eso, sin permitir la flexibilización de la condición del obrero.

El conjunto total de la intervención estatal para el desarrollo de la industria nacional, deja claramente ver el carácter desarrollista. De la mano del BNDE, la inversión estatal en la diversificación y dinamización de la economía alcanzo puntos muy importantes, superiores a los presentados en el gobierno de Lula.

Las políticas intervencionistas simplemente pasaron a otro nivel. Había comenzado con Lula, mas con Dilma, el activismo estatal toma proporciones más importantes, a tal grado de denominar al gobierno de Dilma como desarrollista, calificación que no ganó el gobierno de Lula.

La política desarrollista de estímulo de la industria nacional, era lo que la llevaba a la reducción de los spread, a fin de que las empresas nacionales tengan un mejor acceso a créditos. Dilma, con otras medidas, entre ellas por ejemplo, la reducción del precio del servicio de energía eléctrica, a fin de abaratar el proceso de producción, proponía la “nueva matriz” que justamente adquiere este calificativo de “nuevo” por generar un quiebre con el anterior.

Ya para ese entonces, el capital financiero, se constituía como uno de los actores políticos más relevantes, por el nivel de ganancia que pasaron a tener. Y como la reducción

del interés bancario era parte esencial de la nueva matriz, el discurso del ejecutivo, en la voz del Ministro de Hacienda, Guido Mantega, se erigió drásticamente en contra de este sector, enunciando que el nivel de la tasa de interés, era uno de los más altos del mundo y que existían medios para reducirlos.

La tasa de captación, que es el interés que paga el banco por los recursos, es decir, el interés que recibe el que deja su dinero a plazo fijo en el banco, es infinitamente inferior al interés que cobra el banco por los créditos. La diferencia es de 9,75 % para el primero, y de 30 % hasta 80% para el segundo (Singer, 2015, p. 52). Gracias al planteamiento de reducir los intereses del ejecutivo, hiriendo los intereses del sector financiero, la nueva disposición era echar a Mantega, por consiguiente a Dilma.

La propuesta era reducir los intereses bancarios de créditos, aumentar así las líneas de créditos a consumidores y empresas. Esto va de mano con las políticas rooseveltianas de la nueva matriz económica, de generar una demanda efectiva. Redujo las tasas del banco do Brasil, generando que los demás bancos tomen la misma disposición. En pocas palabras, se estaba sacando el lucro al sector financiero.

Dilma, sin vacilar, a mediados de 2013 avanza un paso más hacia su proyecto desarrollista, manda reducir drásticamente los intereses del Banco Central, esto generó, casi inmediatamente, que los demás bancos también descendieran las tasas de interés. Los bancos, en un primer momento, terminan aceptando las pautas del gobierno, y tuvieron que reducir los spread por una cuestión de lógica de mercado, pues, como el banco central había reducido –por intervención directa del ejecutivo- sus intereses, los demás bancos deberían tomar el mismo camino a fin de no perder demasiados clientes.

La propuesta económica llegaba, de esa manera, a su auge. Sin embargo, esto no duraría mucho. Pocos días después una pequeña inflación, genera que el sector financiero tome medidas de aumento del interés, lo que revertía proporcionalmente las propuestas económicas de la “nueva matriz”.

El sector financiero, con la excusa de la inflación, comenzaba su ofensiva. Condenaba cada vez más vehementemente el intervencionismo estatal en la economía. La fuerte presión, acorralaba gradualmente al ejecutivo, que en aras de mantener la gobernabilidad, tomaba medidas contraccioncitas, al contrario de las expansionistas, que fuera el planteo de su modelo desarrollista.

La oposición, aprovecha cualquier oportunidad para desvirtuar al oficialismo, generando mecanismos de deslegitimación de la autoridad, a través de la tergiversación de información.

En el caso brasileño, se utilizó a la inflación, fenómeno tan natural en el contexto del capitalismo –donde las crisis, son recurrentes por ser parte esencial del sistema- para la re implementación de del anterior sistema funcional al lucro del capital financiero

Se generó una intensa producción mediática sobre la participación estatal en la economía, aspecto característico del gobierno de Dilma. Grandes medios internacionales abogaban por las medidas clásicas liberales, que hacía tan poco habían causado tanto trastorno social.

Desde la ofensiva comenzada por el Banco Central en abril de 2013, con el aumento del interés, no paró hasta dejar totalmente sin armas al ejecutivo, teniendo que ceder progresivamente. En el poquísimos tiempo, entendido entre 2013 y 2014, el ejecutivo tuvo que aceptar la inversión de prácticamente todo su proyecto desarrollista. El gobierno de Dilma ya se había entregado a los intereses de esa burguesía contestataria a inicios de su segundo mandato, con el fin de intentar recuperar algo del respaldo del sector industrial. Nombra, primero a [Joaquim Levy](#) como representante de hacienda, y luego a Nelson Barbosa, entregando a la derecha un sector sensiblemente importante y pilar del proyecto político-económico propuesto a inicios de su gobierno.

En las idas y vueltas de esta lucha de fuerzas, que Dilma iba perdiendo, tuvo que ceder el ministerio de hacienda. El nuevo ministro promovió un aumento de las tasas de interés y la reducción de las inversiones del BNDS y sus líneas de crédito.

Argumentos de una farsa.

Ya desde el comienzo del mandato de Dilma, con plan Brasil mayor, se comenzaban a configurar las coaliciones. En un primer momento, el gobierno, en su ensayo desarrollista, se lo veía alineado con el sector industrial y obrero, por ende, del otro lado, se ponía el sector rentista. En la medida que el sector industrial se fue apartando del gobierno, se unía a la frente burguesa, debilitando el gobierno. Las encuestas son claras, Dilma ganó el segundo turno con un margen muy estrecho, y tan solo unos meses después, su popularidad cae drásticamente (Santana, 2015). La burguesía financiera, aliada a la industrial, supieron orquestar, y con una mano de medios masivos de comunicación, el escenario perfecto y propicio para deslegitimar al gobierno, hasta llegar al punto de conseguir aprobar en el parlamento un juicio políticos con justificativas que, francamente, insultan a la inteligencia. Un fundamento tan débil, sólo pudo haber triunfado por el contexto de descontento generalizado con el gobierno de Dilma, tanto, que no importaba quien asumiera, mientras Dilma dejara de

ser la representante del ejecutivo –esto se ve claramente con la muy baja popularidad de Temer.

Uno de principales argumentos mediáticos para deslegitimar al gobierno fue el de la corrupción, entonces, si supuestamente, el gobierno de Dilma perdió tanta popularidad por “ser corrupto” ¿Cómo se entiende que el presidente de facto, Temer, no sufra el embate de los medios de comunicación y de protestos masivos cuando, por ejemplo, su nombre apareció entre los titulares de una de las cuentas en Panamá, o cuando él es uno de los sindicados en el enorme operativo lava jato, o incluso, cuando uno de los miembros de su gabinete renuncia porque se había filtrado un audio donde este afirmaba que había sido necesario quitar a Dilma del gobierno para parar con el operativo lava jato, inclusive aún con tan baja popularidad? Esto, además de que no se ha podido sustentar ningún argumento, aunque sea frágil, de corrupción, como para someter a un proceso legal a Dilma. Esto es porque Temer es el representante de esta coalición única burguesa. Aun teniendo baja popularidad, tiene una alta gobernabilidad, porque la correlación de fuerzas económicas se lo permite (esto es, el sector industrial-financiero que destruyó la propuesta desarrollista de Dilma).

El caso paraguayo.

A diferencia de Lugo, Lula construyó y fortaleció su figura en torno a un partido el que mismo fundara. Su carrera política fue de menos a más. Comenzó como fuerte líder sindical hasta lanzarse a la arena política. Luego de varias participaciones en elecciones presidenciales, su figura se había convertido en una opción factible. En vista a que, si bien existían muchas posibilidades de ganar la primera magistratura, no lograría tener una buena representación parlamentaria, se alía con el sector empresarial realizando una coalición bastante particular. Por un lado, Lula, dirigente sindical, con un discurso bien a favor de sectores operarios, por el otro, el vice-presidente de la fórmula, un conocido empresario. Incluso, aunque Lula hubiera conseguido una mayoría parlamentaria, su nivel de gobernabilidad, es decir, la posibilidad real de poder llevar a la práctica, sin generar una enorme inestabilidad, su proyecto político, dependería de la capacidad de realizar negociaciones con los actores políticos con capacidad de veto. La elite burguesa –un campo amplio, que lo podríamos clasificar en varios grupos: la rentista-financiera, la industrial-productiva, luego las asociadas al capital extranjero y aquellas al capital nacional

denominadas “burguesía nacional”- en todas sus manifestaciones, concentraban –y concentran- poder suficiente para generar inestabilidad. En Paraguay, el poder se concentra en torno a cuatro pilares: la oligarquía ganadera, empresariado corrupto, los narcos y las corporaciones transnacionales, como ya lo había mencionado más arriba. Lugo, llegó al poder de la mano de una concertación muy endeble, integrado por sectores muy enfrentados: iban desde el partido liberal, el otro partido clásico de derecha ultraconservador, hasta el partido comunista. La Alianza Patriótica para el Cambio (APC) una coalición bastante heterogénea, no consiguió constituirse en una opción de fuerza, opositora al tradicional partido colorado, más allá de las elecciones del 20 de abril del 2008. Eso, sumado a que no consiguió alianzas fuertes con ninguno de los actores políticos con capacidad de veto dentro del país, generó que su gobierno perdiera fuerza.

Lugo llegó al poder sin un proyecto de gobierno claro y concreto. En la medida en que la concertación se ampliaba, las deudas y compromisos políticos aumentaban. Los principales puntos del discurso de Lugo debían ser lo suficientemente eclécticos para no contradecir ninguno de los intereses de su coalición. Y no es nota menor mencionar que esa coalición estaba conformada por grupos esencialmente antagónicos. Lugo, por la carencia de concreción y claridad, sufriría una enorme crisis de gobernabilidad.

El caso de Lugo, resulta muy particular, en relación a las demás experiencias progresista de la región. Por todo el andamiaje estructural del partido colorado, que estuviera en el poder desde 1947 de manera continua y autoritaria, hasta el 2008, momento en que se da la única transición pacífica, de un color a otro, en la historia del Paraguay. La particularidad resulta en las condiciones en la que asume. En función del pesado lastre de dominación colorada –que continuó por cuatro periodos luego de 1989, momento de la caída de la dictadura- la institucionalidad estatal se encontraba totalmente dominada por el mismo color. Es que, si bien, Stroessner había abandonado el país, eso no significó la ida del stronismo. Esto se ve claramente, cuando hoy, por ejemplo, Mario Abdo Benítez, quien es el nieto del señor con el mismo nombre, quien fuera, en la época dictatorial, secretario privado del dictador y miembro del “cuatrinomio de oro” hoy es el presidente de la cámara de senadores. Y esto no es un dato menor, atendiendo a que luego de la reforma constitucional del 92, las atribuciones del ejecutivo se vieron cercenadas de manera muy profunda a favor del parlamento, generando, en la actualidad, un presidencialismo bastante atenuado y un parlamento con mucho más poder. No en balde, se tornaría común el calificativo de “súper poderes” del parlamento, esto sumado a que la misma constitución del 92, prohíbe la

reelección, consecutiva, del presidente, pero sí, la reelección indefinida de los miembros parlamentarios. Que la presidencia del mayor poder institucional, encargado de elegir al contralor de la república, seleccionar embajadores, vetar proyectos de presupuesto nacional –como muchas veces cercenó las ampliaciones presupuestarias al sector social, propuesto por el ejecutivo- entre otras funciones, se encuentra en manos del mismo partido que asoló al Paraguay, y, peor aún, de un familiar tan cercano a uno de los “hombres fuertes” de la dictadura, no es nota menor. La configuración oligárquica del poder gubernamental en Paraguay, siempre fue, en función al sistema impuesto por la dictadura, funcional a los cuatro depositarios de poder, descritos más arriba por Palau.

En vistas a que, Lugo, por la forma tan endeble de la coalición que lo catapultó al gobierno, no consiguió tener representatividad en el parlamento. De los 45 senadores, 15 eran colorados, 14 liberales, 9 del UNACE, y los demás 6, pertenecientes a pequeños grupos de socialdemocracia y sólo uno a un partido socialista. Esto, sumado a que, los del partido colorado y UNACE, solían coincidir en las posturas, generando una mayoría aplastante; y a que, el partido liberal, miembro de la coalición presidencial –ocupando la vicepresidencia- poco tiempo después de las elecciones, se apartó de la coalición (ACP).

El gobierno de Lugo, no tuvo la característica desarrollista del PT, en el Brasil, en función a las trabas mencionadas más arriba. Es por ello que resulta difícil ubicarlo dentro de la categoría de “izquierda”, mas, atendiendo a otros indicadores, del mismo Giddens, citado más arriba, quien hace referencia a la “*búsqueda de la justicia social*” podría ser posible, atendiendo a las dificultades del estiramiento conceptual, acomodarlo en tal sector, sin embargo, creería más “seguro” ubicarlo más en el centro, puesto que él mismo, en vista a su postura política, se había autodenominado de tal posición. Para ello, es necesario mencionar que las carteras ministeriales destinadas al servicio social si funcionaron. Una de los logros más aplaudidos fue el conseguir la gratuidad del atendimento de salud pública, pensión a la tercera edad, una cierta mayor atención a movimientos sociales etc.

Comentarios finales.

Los ambos casos mencionados de crisis de gobernabilidad, como se pudo ver, obedecen a situaciones diferentes, por diversos factores estructurales y sociales, sin embargo, obedecen a una misma matriz: el fortalecimiento de actores políticos cercanos los intereses extranjeros. El actual vicepresidente de Brasil –quien ejerce el poder de facto- y el actual presidente del Paraguay, obedecen a la misma lógica, a saber, la extranjerización de

los recursos nacionales, la flexibilización de las condiciones laborales y la atenuación de la dependencia al capital extranjero. Este trabajo ha intentado aportar algunos elementos para enriquecer el debate en torno al “fenómeno” que se está dando en la región.

Bibliografía.

PEREIRA DA SILVA, F. Vitórias na crise. BRASIL. Ponteio. 2011

VUYK, C. Subimperialismo brasileño y dependência del Paraguay, los intereses económicos detrás del golpe de estado del 2012. ASUNCIÓN. Cultura y Participación. 2014

SANTONO, A. El comunismo italiano y la vía chilena, los orígenes de un mito político.

SANTIAGO. RIL editores. 2011

GAITAN, F; BOSCHI, R. Estado, atores predominantes e coalizões para o desenvolvimento: Brasil e Argentina em perspectiva comparada. BRASILIA. Ipea. 2015

Palau Viladesau, T. Las buenas intenciones no bastan. ¿Es el proyecto de Lugo sólo un nuevo intento? Revista Novapolis. *Cómo Cambia la política en el Paraguay del Siglo XXI*. Asunción. 2007. Centro de Estudios y Educación Popular, Arandura. Tomo I. pp. 63-76

SINGER, A. CUTUCANDO ONÇAS COM VARAS CURTAS O ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014). 2015

SANTANA, C. Trade-Off Eleitoral do PT e o Esgotamento do Centro Político. Ed. Nucleos de estudo do empresariado, instituições e capitalismo. 2016

LOPEZ, M. LA DEMOCRACIA EN PARAGUAY Un breve repaso sobre los partidos políticos tradicionales, el sistema electoral y el triunfo de Fernando Lugo Méndez. Revista efoques. VOL III, N°13. 2010.p. 89-106

LOPEZ, M. Democracia en Paraguay: la interrupción del «proceso de cambio» con la destitución de Fernando Lugo Méndez (2012). Cuadernos del CENDES. N°85. 2014

BASE IS. Golpe a la democracia. Rosa Luxemburgo. Asuncion. 2012

BASE IS. La ofensiva de las derechas en el cono sur. Rosa Luxemburgo. Asuncion. 2010